

03 Colapso del comunismo – fracaso del reformismo

“Mucho antes de 1989 ya se vislumbró, que sin creatividad no puede haber bienestar y sin democracia no puede haber creatividad.”

Jacques Attali

Si la lógica del interés privado y del capital privado prevalece como mecanismo principal para la dirección de la actividad económica y para la distribución de riqueza, conocimiento y poder, no puede haber un desarrollo armónico que tenga sentido para toda la sociedad y, en consecuencia, tampoco podrá existir una paz social duradera. La ambición por ingresos cada vez mayores, por bienes materiales y, a partir de ellos, influencia política destruye las relaciones entre los hombres. Si se quiere detener este espantoso proceso, se debe desactivar la función de este resorte hasta hoy sin control. El concepto de crecimiento debe adquirir una nueva dimensión cualitativa.

Un propósito semejante sólo puede hacerse realidad en el marco de una política que aspire a cambios estructurales radicales en los más diversos ámbitos de la vida individual, social y económica. Un primer intento de cambio profundo de este tipo aconteció a comienzos del siglo XX en Rusia. Las causas de la desventura de la Revolución Soviética fueron examinadas en incontables tratados desde los más variados puntos de vista. Aquí debemos limitarnos a una observación sumaria de los aspectos centrales del sistema comunista, tal como existió entre 1917 y 1989 en el denominado Bloque del Este.

En los primeros años posteriores a la Revolución Bolchevique, amplios círculos de la clase obrera y sectores de la intelectualidad, tanto del Viejo Mundo como del resto, contemplaron fascinados los acontecimientos en Rusia. La caída del régimen zarista y la toma del poder por parte de los revolucionarios despertaron enormes esperanzas entre los perjudicados por la explotación capitalista. A ambos lados del Atlántico (por ejemplo, en Francia, España, Chile y Uruguay en el transcurso de la década de 1930; en ambos países sudamericanos otra vez en tiempos más próximos), los comunistas pudieron participar de gobiernos de frentes populares, que corrieron suerte diversa.

Comunismo en Rusia y Cuba

En la Unión Soviética y sus países satélites, el principio del “centralismo democrático”, que les fuera recomendado a los pueblos como herramienta para la construcción de la dictadura del proletariado, fue limitado desde el mismo comienzo a los pequeños círculos de los cuadros revolucionarios. Parece que para los bolcheviques, una forma más creíble y eficiente de participación democrática estuvo descartada en la práctica. Es evidente que semejante tarea de reconstrucción en aquella Rusia, marcada por las condiciones de dominio feudal y cuya

población, mayoritariamente analfabeta y casi sin noción de democracia de base, hubiera sido una empresa dificultosa.

Si bien los *naródniks* habían realizado un importante trabajo preparatorio en las décadas previas a las revoluciones de 1905 y 1917 esforzándose por difundir el ideario socialista, no fue suficiente para una consolidación duradera de la teoría y la práctica democráticas en la sociedad rusa. Incluso autores que se reconocen marxistas (Cockshott et al 2006: 19), admiten que “tanto por factores externos como internos, la Unión Soviética estaba muy lejos de ser democrática en la época de la implantación de la economía dirigida” y, en lugar de eso, cayó en una “mezcla de terror y trabajo forzado”.

Los simpatizantes contemporáneos del socialismo tampoco pueden evitar enfrentarse con la realidad: “Los proyectos socialistas destinados a reemplazar al capitalismo por un sistema diferente, en lugar de lograr mayor libertad, crearon nuevas formas de dominio totalitario” (Ringger 2008: 8). O bien: “Las experiencias de las revoluciones socialistas en el siglo XX demuestran que ninguna consiguió instituir una democracia participativa, a pesar de que era el programa original de los soviets” (Moulian 2003: 172).

Así la evolución casi lógica del “centralismo democrático” a un instrumento del Estado policial aparece a los ojos de los adherentes a un sistema auténticamente socialista como una consecuencia no deseada en absoluto. Por cierto, en el caso de la Unión Soviética no se puede soslayar que las agitaciones inmediatas de contrarrevolucionarios “blancos” en el interior después de la Revolución, por un lado, y la creciente amenaza mortal del fascismo nazi, por el otro, contribuyeron decisivamente para consolidar el régimen estalinista. Pero el germen para una evolución antidemocrática se encontraba ya en las primeras células bolcheviques, listo para reproducirse.

La resistencia en parte activa, sin embargo mayormente pasiva de la población rural rusa contra la estatización y colectivización de la economía agrícola, fue tanto más entendible teniendo en cuenta que al comienzo los revolucionarios bajo la conducción de Lenin habían propagado el eslogan “La tierra es para el que la trabaja”. En todo caso, este proceso comenzó a rodar en una dirección muy diferente a la que Marx había imaginado con la “extinción del Estado” y, en su culminación, con una federación de productores libres.

Podría entenderse que el régimen comunista bajo Stalin sólo haya podido sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial, etapa especialmente horrenda para la Unión Soviética, imponiendo con métodos dictatoriales el traslado de importantes y estratégicas ramas industriales detrás de los Urales durante la Segunda Guerra Mundial, etapa especialmente horrenda para la Unión Soviética y donde el régimen sólo pretendía sobrevivir. Puede que el centralismo y una clara estructura de mandos hayan sido decisivos para la conducción de la guerra y de la economía de guerra (Pallmann: 255-259). Pero tan importante como fatal fue también el hecho de que, después del triunfo sobre el fascismo, estas estructuras extremadamente rígidas, no fueran reemplazadas en el ámbito económico y tampoco en el político por mecanismos de participación democrática más auténticos. El “centralismo democrático” estranguló todo rudimento para lograr una apertura del sistema. Esta evolución errónea devino en una tragedia no sólo para la Unión Soviética, sino sobre todo para aquellos países del Este europeo que, como Hungría, Polonia, Checoslovaquia y los pequeños estados

del Báltico, ya habían tenido en su historia experiencias iniciales de lo que representaba un régimen democrático.

Los soviéticos y sus aliados no entendieron (o no quisieron comprender) que debían liberar a tiempo la economía del chaleco de fuerza que representaba la administración centralizada estatal. En la época de la Guerra Fría se dejaron inducir a una continuación de métodos de economía de guerra, que además atribuyó importancia exagerada al sector bélico y a los vuelos espaciales. Tampoco se dieron cuenta de que su oponente, los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en la década de 1980, estaba ansioso por destruir la economía rusa valiéndose de la carrera armamentista – un objetivo que fue logrado en verdad con precisión cronológica. Por otra parte, esto no debe impedirnos ver que la falta de principios democráticos en la Unión Soviética fue un factor por lo menos tan importante en el devenir histórico como la actuación desde el campo capitalista.

El derrumbe no sólo certifica la pobreza del sistema bolchevique autoritario hacia el interior de la misma nación. Señala también la incapacidad de los gobernantes soviéticos para representar de manera eficaz y convincente los intereses del campo socialista en el exterior. Moscú se hallaba demasiado atrapado en su propio enrejado ideológico como para poder romper con el aislamiento producido por la rigidez dogmática y la construcción del muro, pero también por medidas dirigidas desde Occidente para paralizar el Bloque del Este. La creciente petrificación producía además dolores de cabeza en las fuerzas revolucionarias de América Latina. Ya en el período de entreguerras y obedeciendo los dictados de la Unión Soviética, los Partidos Comunistas del subcontinente una y otra vez debieron dar marcha atrás, sembrando así la discordia en las propias filas que alimentaron fuertes dudas sobre su propia autonomía de pensamiento y, en consecuencia, también perjudicaron gravemente su reputación (Rey 2008: 51ff.).

Uno de los pocos Estados en los que el modelo soviético fue reproducido fuera de Europa y que ha sobrevivido el derrumbe del sistema en la “Madre Patria comunista” hasta el día de hoy es Cuba. La isla caribeña es el único país de América Latina, probablemente hasta de todo el Tercer Mundo que, a pesar de la política de bloqueo sostenido por los Estados Unidos desde hace más de medio siglo y la pérdida de las relaciones económicas otrora tan importantes con la Unión Soviética, pudo mantener por lo menos un mínimo de calidad de vida para toda la población (Hinkelammert 1999: 97).

Las necesidades básicas de educación y asistencia sanitaria abarcadoras gratuitas y el abastecimiento general de los alimentos más importantes, si bien precario en algunos aspectos, pero por lo menos impidiendo las consecuencias más graves de la subalimentación y desnutrición, y también de viviendas que, al menos, son un poco más dignas que las condiciones en los innumerables barrios marginales del mundo subdesarrollado, pudieron ser aseguradas en general bajo el gobierno de Fidel Castro, pese a las circunstancias más desfavorables. Frente a esto, ni la “Alianza para el Progreso” patrocinada por los Estados Unidos ni los diversos gobiernos reformistas de América Latina (ya sea de corte socialdemócrata o de cualquier otro signo burgués) pudieron exhibir resultado parecido.

Como única excepción podría mencionarse al pequeño Costa Rica, gobernado de manera relativamente creíble en forma democrática desde hace muchas décadas.

Que el régimen comunista en Cuba haya podido defender con éxito estos derechos sociales básicos para todos e incluso mantenerlos en el período de transición extremadamente difícil, a comienzos de la década de 1990, es un logro que ninguna propaganda hostil puede discutir y que tanto para los demás países de América Latina como para el resto del Tercer Mundo tiene carácter ejemplar. Las grandes mayorías de estos pueblos han reconocido instintivamente el valor de estos progresos a despecho de los medios burgueses que quieren callarlo a cualquier precio. El aplauso popular a los logros sociales del régimen castrista suele retumbar en toda la región en ciertas oportunidades como, por ejemplo, en las Cumbres Latinoamericanas.

En el futuro no puede existir ningún modelo político, social, económico ni cultural, que no coloque la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población de forma tan decidida en el centro de sus esfuerzos conjuntos como la Revolución Cubana. En el Tercer Mundo éste es un requisito que, en el marco de un desarrollo puramente capitalista, lisa y llanamente no es posible.

El hecho de que Cuba, a pesar de este éxito indiscutible, no esté también desde el punto de vista económico tan claramente a la cabeza del subcontinente, debe atribuirse a una política económica errática en varios aspectos. Ahí está, en primer lugar, el repetido ir y venir entre titubeantes intentos de flexibilización de la planificación económica centralizada y un regreso ciertamente agitado a los dogmas del comunismo marxista. Tan pronto como el jefe revolucionario se daba cuenta de que el despliegue de empresariado libre en determinados sectores estaba llevando a una polarización social relativamente rápida entre individuos creativos (ergo “exitosos”) y el resto mayoritario de la población, hacía uso del freno de mano (Rey 2008: 75-79).

Esta reacción y vuelta a normas imbuidas de estalinismo delata, por un lado, un desconcierto de la conducción cubana. Por el otro, hay que tomar en consideración que los revolucionarios en estos intentos confusos de reformar su régimen comunista experimentando con medidas liberalizadoras que, hasta ese momento, siempre habían sido calificadas como “inimaginables” por sus pares, actuaron como pioneros. Y como tales, apenas pudieron hacer otra cosa que equivocarse y tomar nuevos impulsos.

Paralelamente a estos esfuerzos de política económica, hay que reconocer además que los cubanos, en el marco del denominado Poder Popular, encararon el intento de instaurar poco a poco una serie de derechos democráticos de base, como no existen en ningún otro país latinoamericano, tampoco en Costa Rica (op.cit.: 82-87). La mera comparación de cómo, después de la debacle de la deuda de las décadas de 1980 y 1990 bajo los dictados del FMI, el Banco Mundial y las otras instancias del mundo capitalista, sin ninguna consideración por las víctimas sociales, impusieron “ajustes” a la crisis en toda América Latina con la excepción de Cuba, y cómo, por otra parte, después de la separación forzosa de La Habana del imperio soviético colapsado, la población cubana en su conjunto pudo tener voz sobre la política de saneamiento a tomar, por demás penosa, habla por sí sola.

No se puede soslayar, que en otros aspectos (partido único, libertad de opinión y reunión de los disidentes, etc.) Cuba está muy lejos de una democratización auténtica. Sin embargo, la crítica en relación a las fallas democráticas sólo es legítima, primero, cuando contempla los derechos humanos de forma abarcadora, o sea, cuando tiene en cuenta el costado social del problema (donde la Revolución Cubana sale mucho más airosa que la mayor parte de los regímenes burgueses del Tercer Mundo) y, segundo, cuando valora el grado y el peso de esas fallas en relación correcta con situaciones anómalas comparables en otros países. En este sentido (en lo que atañe, por ejemplo, a estadísticas de asesinatos, tortura, miseria y polarización social) los responsables en La Habana no necesitan esquivar comparación alguna. Quien quiera hacerse de una imagen objetiva de la realidad social y el estándar de vida en los diferentes países puede encontrar información estadística amplia y sólida en el PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (www.undp.org).

Un concepto que evidentemente arrastra graves consecuencias es el de “igualación” u “homogeneidad de las masas” con el objetivo de una unidad y unanimidad exageradas hasta el absurdo, típico de gobiernos comunistas, tal como también persiguió por largo tiempo el régimen cubano (Eggenberger 2002: 103). Igualación y homogeneidad son, en todo caso, términos problemáticos, peligrosos, hasta fatales. La consigna de *égalité* proveniente de la Revolución Francesa, se refería a igualdad ante la ley, seguramente también a igualdad de oportunidades, pero no a una nivelación en todo sentido que, con certeza, desembocaría en un aplanamiento absurdo de la sociedad humana.

Tanto para los comunistas rusos como para sus imitadores en todo el mundo, especialmente en América Latina, debe valer además que la política social sola no es suficiente. Debe poder surgir también el espíritu empresarial que, sin embargo, ha de diferenciarse del sistema capitalista en el sentido de traer beneficios colectivos en vez de satisfacer afanes egoístas. Deben encontrarse mecanismos que estimulen la creatividad, pero no en favor de la maximización de ganancias en provecho propio, privado, sino al servicio de la construcción de una sociedad solidaria. En la conciencia de muchos miembros y simpatizantes de gobiernos de izquierda en América Latina, tanto del pasado como del presente, este criterio parece no estar todavía suficientemente consolidado.

En el convencimiento de que el capitalismo, tal como presumía el historiador Fernand Braudel (citado en: Ringger 2008: 8), no sucumbiría por degradación “endógena”, sino que “únicamente un impacto externo de vehemencia extrema unido a una alternativa creíble podrían causar su derrumbe”, los revolucionarios cubanos, a pocos meses de tomar el poder en la isla, quisieron poner manos a la obra. En una primera ola de intentos revolucionarios con su ayuda activa o logística (Rey 2008: 94-110) debía encenderse la chispa de la sublevación en varios países. En la década del sesenta y tempranos setentas, sin embargo, esta operación fracasó claramente en todas partes, porque los revolucionarios subestimaron la capacidad de reacción del oponente, que además fue apoyado en la región con todos los medios disponibles por Estados Unidos, la potencia mundial.

Como un cálculo errado igualmente grave, se reveló la suposición de que condiciones sociales catastróficas serían suficientes por sí mismas para abonar la disposición revolucionaria social.

Esto no es así, como versados conocedores de la historia latinoamericana señalan (Skidmore et al 2001: 413-417). La pobreza por sí sola, así manifiestan, no provoca ninguna revolución. Los Partidos Comunistas, además, estuvieron alguna que otra vez al borde de la disolución en la mayoría de los países del subcontinente. El movimiento obrero, por su parte, tenía peso político solamente en algún caso aislado, por ejemplo, en Argentina – y justamente en este país, careció de inclinaciones revolucionarias en el sentido marxista.

En contraposición, el campesinado como fuerza revolucionaria se manifiesta vigorosamente en la Revolución Mexicana bajo el liderazgo de Emiliano Zapata, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y nuevamente en México con logros importantes, aunque transitorios (bajo el electo general Cárdenas, 1934-1940), parcialmente en Colombia y también algunos esbozos en Bolivia. Como obstáculo constante para los revolucionarios se reveló el hecho de que las clases medias tenían mayores simpatías hacia las clases altas que hacia las bajas. Esto pudo observarse especialmente en Brasil 1964, Chile 1973 y Argentina 1976. La clase media favorece (o tolera) según la oportunidad, golpes de estado o elecciones. Los empresarios también se comportan con titubeos: oscilan pendularmente más bien entre proteccionismo y libre comercio.

Con el propósito de subsanar los errores del primer impulso revolucionario, en un segundo intento a partir de mediados de los setenta, los grupos radicales de izquierda aspiraron a la formación de alianzas con las más diversas organizaciones populares en Centroamérica (Rey 2008: 133-143). Por lo pronto esta estrategia política condujo al éxito en Nicaragua, donde en 1979 los sandinistas, gracias a la conformación de una amplia coalición, pudieron derrocar a la odiada dictadura del general Anastasio Somoza. Recién tres décadas más tarde fue posible –después de guerras civiles, que se cobraron muchísimas vidas– que en El Salvador asumiera al cabo de elecciones generales un gobierno de (leve) tendencia socialista, aunque mayoritariamente compuesto por fuerzas moderadas.

Después del cambio de milenio, en América Central y del Sur asomó una paulatina y ostensible tendencia a la izquierda, sobre todo luego de la democrática toma de poder de Hugo Chávez en el estado petrolero de Venezuela, bastante venido a menos. También por medio de elecciones generales en Bolivia logró imponerse el MAS, partido de raíz socialista indígena, bajo la conducción de Evo Morales. Poco tiempo después ganaron la primacía en Ecuador las fuerzas partidarias del joven economista Rafael Correa, reformistas relativamente radicales, pero más burguesas que revolucionarias de izquierda. Después de una década y media de intervalo con predominio de fuerzas conservadoras sumisas al dictado de Estados Unidos, en Nicaragua los sandinistas volvieron al poder de la mano de Daniel Ortega, pero esta vez con un gobierno caracterizado mucho más por su orientación autoritaria y populista que por una clara tendencia socialista y democrática de base como la que había predominado entre 1979 y 1990.

Hacia la izquierda también giró en 2009 transitoriamente también Honduras, país que en los años ochenta había servido como el punto de apoyo más importante a los grupos contrarrevolucionarios, que presionaron militarmente el gobierno del FSLN en la vecina Nicaragua por orden de Washington durante largo tiempo, hasta que en las elecciones de 1990 los sandinistas se llevaron un chasco a manos de conservadores y neoliberales. En

Tegucigalpa, el gobierno del liberal Manuel Zelaya pudo sostenerse en el poder un par de meses y, en ese lapso, iniciar un acercamiento a la alianza de orientación izquierdista ALBA de Chávez. Con la tolerancia muda de los Estados Unidos, este gobierno constitucional fue derrocado y sustituido por otro más grato a la oligarquía local.

La mayoría de los grupos de poder de orientación izquierdista, que también salieron a flote en algunos pequeños y minúsculos países del Caribe, si bien se sintieron unidos por los sentimientos anti-neoliberales, carecieron de una sólida base programática. Se mostraron inseguros y confusos en la cuestión central acerca de cómo conciliar una política económica solidaria con el despliegue de fuerzas creativas. Esta “cuadratura del círculo” con la que también la Revolución Cubana no pudo arreglárselas hasta hoy, les produce dolores de cabeza permanentes sin que haya alguna solución a la vista que estuviera fundada en teoría sobre bases sólidas y que fuera realizable en la práctica. Sólo los zapatistas (grupos indígenas en la provincia mexicana de Chiapas, que siguen el ejemplo de Emiliano Zapata) comenzaron con la reforma de sus estructuras sociales y económicas de manera original y propia, difícilmente reproducible en otro sitio (Rey 2008: 165-173).

Límites y frustraciones de la política reformista

Los partidos y movimientos orientados hacia el socialismo radical y la democracia de base coincidieron en un punto: en que desde hacía mucho tiempo una política clásicamente socialdemócrata o demócrata-cristiana no podía cubrir las necesidades de América Latina. Después de las experiencias con socialdemócratas como Tony Blair y Gerhard Schröder, nadie que hubiera creído en los ideales de las recetas reformistas burguesas, podía abrigar ningún tipo de esperanza. Sin embargo, vale la pena iluminar brevemente el destino de imitaciones de estos regímenes, que en los últimos tiempos también existieron en Sudamérica (Brasil, Chile, Uruguay, donde sólo continuaron administrando al neoliberalismo).

No queremos olvidar: Hubo una vez un tiempo en que no sólo la socialdemocracia alemana (bajo Kurt Schumacher), sino hasta la también alemana Unión Demócrata-Cristiana (con su Programa de Ahlen, 1947) entonaban un registro anticapitalista. Pero esto quedó en el pasado.

La socialdemocracia tradicionalmente siempre estuvo por una economía mixta, por la mitigación de las “desigualdades” del capitalismo a través de impuestos progresivos y por el bienestar social, la democracia parlamentaria y las libertades cívicas (Cockshott et al 2006: 15). En varios países consiguió con esto mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Hasta hace pocos años algunos (Frankfurter Rundschau, 14.09.2005) abrigaban todavía alguna esperanza de que la “economía social de mercado”, como camino intermedio entre los extremos de un capitalismo desenfrenado, por un lado, y un socialismo burocrático, por el otro, podría evitar tanto los contrastes más agudos como las tesis sobre lucha de clases más rotundas y garantizar, al menos, la protección de los más débiles de la sociedad. Pero al fin de esta era, las “desigualdades” antes mencionadas subsisten, agravadas cada vez más durante las últimas décadas.

La estrategia socialdemócrata tuvo como base un alto crecimiento económico, que debía ser capaz de abarcar a toda la población e integrarla económicamente (Hinkelammert 1999: 100). El sistema de seguridad social estaba diseñado para una sociedad, en la cual la desocupación

fuera sólo un fenómeno marginal. Pero si la falta de trabajo productivo y regulado crece sin ninguna perspectiva de que en un período de tiempo previsible se revierta, como es el caso en amplias regiones de América Latina, del Viejo Mundo y de los Estados Unidos desde hace varios años, el capitalismo entra en conflicto con la seguridad social, que desde mucho tiempo antes le había conferido legitimidad.

En opinión de diversos intelectuales suizos de izquierda, el proyecto socialdemócrata de domesticar el capitalismo fracasa, no en última instancia, porque casi no se intentó seriamente expandir el principio de los controles democráticos al ámbito de la economía (Ringger 2008: 8, 240, 245; Zeller 2006: 311). Entretanto la socialdemocracia está tan fuertemente implicada en las estructuras de poder capitalistas que, desde comienzos de la década de 1980, sus partidos más importantes sucesivamente se fueron alineando con el neoliberalismo y se comprometieron activamente en la “modernización” del capitalismo.

Lo que ya le había sucedido a la socialdemocracia en el cambio del siglo XIX al XX, se repite en la tendencia recurrentemente desde el comienzo: las posibilidades de éxitos políticos parciales hace empalidecer los objetivos revolucionarios a largo plazo. El deseo de prestigio y puestos políticos cubren por completo los ideales cultivados alguna vez. Otros investigadores sociales (por ejemplo, Bischoff en: Prokla 2005: 526) también llegan a la misma conclusión: Debido a experiencias históricas y déficits teóricos básicos, la socialdemocracia no ha podido (o querido) desarrollar alguna concepción nueva y sólida sobre el control social del capital o sobre el direccionamiento de las inversiones.

Ahora se hunde –bajo la mirada y la estupefacción de políticos reformistas burgueses de todos los pelajes– la sociedad en los Estados Unidos, en Europa y en vastos sectores del resto del mundo “desarrollado” bajo la dictadura (por supuesto no declarada, pero evidente) del capital financiero. El amargo final de este proceso asomó a más tardar desde 1998 (con la irrupción de la crisis del Sudeste Asiático, el derrumbe del primer *hedge fund*, la debacle de Rusia: todo esto con gravísimas consecuencias para las regiones periféricas, en especial, América Latina) para todos aquellos que quisieran verlo. La creencia ciega en “la capacidad del sistema para el autocontrol”, A pesar de todo, se mantuvo tercamente en los círculos gobernantes. Pero los cracs bancarios, las bancarrotas o cuasi bancarrotas estatales, una desocupación de dimensiones preocupantes, las acciones de rescate billonarias y la amenaza de una acelerada inflación se sucedieron con una lógica inexorable.

La estrategia socialdemócrata para la superación de esta situación inquietante puede resumirse en tratar de “civilizar” a la globalización y al capitalismo (Schäppi en: Widerspruch 2009: 108). Las causas de la crisis no fueron consideradas como consecuencias de la absurda acumulación del capital, sino tan sólo como “excesos” del capitalismo neoliberal o como inestabilidades ocasionadas por regulaciones del sistema financiero demasiado débiles, cuando no, como resultado de la codicia de algunos capitalistas. Desesperadamente muchos intentaron orientar sus postulados políticos hacia lo “factible”. Otros se dejaron inducir a tomar la decisión de un desmantelamiento paulatino del Estado social, dando anuncio con ello al entierro de la democracia (Bischoff en: Prokla 2006: 180).

Bajo semejantes circunstancias fue inevitable que la socialdemocracia perdiera credibilidad a ojos vista en muchos países. Entre 1993 y 2003 sus sindicatos en la UE perdieron en

promedio un 15% de afiliados (Dörre en: Widerspruch 2008: 96). El Partido Socialdemócrata de Austria aparecía desconcertado en medio de la extensa crisis que se profundizaba. Igual de deprimentes eran las perspectivas de los camaradas en Alemania y Grecia, donde habían ejercido el Poder Ejecutivo por largos períodos. En Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Venezuela (antes de Chávez) y Bolivia (antes de Morales), la miseria de las izquierdas moderadas se expresaba en que se dieron por conformes aceptando sin réplica los dictados de los círculos económicos neoliberales, mientras sus exponentes pudieran mantener el poder gubernamental en sus manos.

En la historia más cercana de América Latina, para los políticos reformistas, la simple capitulación ante la supremacía del capital financiero de ninguna manera fue algo sobreentendido. Mientras en el siglo XX en el Hemisferio Norte se tramaban cruentas guerras, el subcontinente se abocaba a la búsqueda de una política de desarrollo alternativa, de una respuesta al capitalismo, ya entonces cada vez más vertiginoso y delirante.

Con la concepción de la opción comúnmente conocida como ISI (industrialización por sustitución de importaciones), los latinoamericanos abrieron nuevos e importantes caminos en algunos aspectos y, al menos transitoriamente, pudieron alcanzar éxitos notables. Para dos generaciones (entre 1930 y 1970 aproximadamente) se ofreció así la perspectiva de un futuro mejor para una mayoría sustancial de la población. Que esta esperanza finalmente se estrellara, en mi opinión, se debió sólo parcialmente a ciertas fallas de esta estrategia de desarrollo (la ISI), diseñada principalmente en el marco de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU). En una porción mucho más grande e importante fue una consecuencia del dictado de corporaciones transnacionales, gobiernos e instituciones multilaterales del Norte (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), que les señalaron a los latinoamericanos el camino y les prescribieron recetas, que destruyeron los progresos sociales y económicos alcanzados con anterioridad.

El hecho es que estos países en desarrollo y emergentes ni con la política ISI, tampoco con una política EOI (industrialización orientada hacia la exportación en vez de privilegiar al mercado interno), pudieron construir condiciones sociales que permitan una distribución medianamente justa del valor agregado obtenido y que, al mismo tiempo, posibiliten un desarrollo tecnológico autónomo. Los países quedaron enganchados en una red de dependencias no sólo en estos aspectos centrales, sino que cayeron muy profundamente además en la trampa del endeudamiento interno y externo de la cual casi no hay escape posible dentro del marco de la política burguesa (Kurz 1991: 199-201; Rey 2006: 88).

En el empeño por suscitar un desarrollo independiente multiplicado, no sólo intervinieron intelectuales y políticos civiles, también representantes del poder militar –lo que ciertamente merece ser destacado– hicieron aportes valiosos en varios países. En la década de 1930 estos esfuerzos dieron pie a un concepto económico abarcador, tanto para el interior como para el exterior, en México bajo el general Lázaro Cárdenas, mientras que en Chile (1932) y Bolivia (1936-1938), se limitaron a determinados episodios que se podrían etiquetar bajo el rótulo de “socialismo militar”. Tres décadas más tarde esta estrategia de desarrollo, que debía llevar principalmente a un control más riguroso de los recursos naturales (sobre todo petróleo y gas

natural) y en parte también a una desposesión del poder de la oligarquía terrateniente, revivió de la mano de gobiernos militares nacionalistas de izquierda no represivos en Perú, Panamá, Bolivia y Ecuador.

De estas diversas experiencias, aquellos uniformados y civiles que tendían a un pensamiento radical, aprendieron una lección de importancia fundamental: el capitalismo periférico sigue siendo capitalismo, con todas sus características implícitas. Su núcleo inhumano, su tendencia indomable a desencadenar una codicia sin límites, su desconsideración frente a la Naturaleza y a seres humanos indefensos, su incapacidad para superar sus propias limitaciones, para aprender de las experiencias, para evitar cometer una y otra vez los mismos viejos, casi clásicos errores y entregarse a sus vicios; todo esto hizo que una multitud creciente de latinoamericanos de todas las nacionalidades, clases y religiones llegaran a una conclusión: ¡Así no! Las numerosas lecciones, que la historia les había dado desde la época colonial más temprana hasta el presente, les sugerían que esto no podía ser así. ¡Ni el capitalismo irracional e indigno para el ser humano, tampoco el rígido, burocrático y represivo socialismo de tipo soviético!

Se nos impone así una toma de conciencia cuya quintaescencia consiste en que “toda alternativa a la economía de mercado hoy vigente debe seguir moviéndose dentro del marco de los mercados”, ya que “no se puede sustituir al mercado como tal por otra cosa” (Hinkelammert 1999: 119). Sin embargo, el mercado no debe ser entendido como “única instancia decisiva y total de todas las cuestiones sociales” (op.cit.), como se exige desde el flanco neoliberal.

Y es allí donde los ánimos se dividen: a los políticos burgueses les falta convicción ideológica y decisión para encaminar una política alternativa y representar valores que se opongan claramente al modelo neoliberal (Sader en: Prokla 2005: 547-548). En este campo ni siquiera se contempla la discusión sobre una reforma impositiva radical. Si bien de vez en cuando se reconoce la prioridad de una política de estabilidad monetaria, se la ve, sin embargo, bajo una luz falsa: en lugar de colocarla en el marco de una nueva política de desarrollo, verdaderamente alternativa, se la quiere someter a los criterios capitalistas ortodoxos, que exigen especialmente un cumplimiento incondicional del servicio de la deuda y se niegan rotundamente a modificar las relaciones de propiedad imperantes.

Después del fallido intento de Allende en Chile de instaurar una democracia socialista poco a poco y sin empleo de la violencia armada, después de la larga noche de conservadores y dictatoriales gobiernos militares en la mayoría de los países de América Latina y luego del régimen sandinista en Nicaragua, exitoso sólo en algunos aspectos parciales, el subcontinente debió primero soportar “la cura sanadora” del neoliberalismo. Bajo los dictados del FMI, del Banco Mundial y del capital financiero globalizado, las organizaciones populares con sus partidos y movimientos de izquierda, no obstante, revivieron con un brío totalmente inesperado, al menos para los burgueses.

Impulsado por el elocuente –aunque no siempre muy diplomático- Jefe de Estado de Venezuela, surgió paso a paso con el cambio de milenio un bloque de gobiernos izquierdistas

en la región al sur del Río Grande. Por cierto, no a través de revoluciones políticas, sino –sin excepción– por el camino de la constitucionalidad a través de repetidos triunfos en elecciones populares y plebiscitos. Esta Nueva Izquierda latinoamericana consiguió evitar esta vez algunos errores desde el punto de vista económico, financiero y social que se habían cometido en etapas anteriores y, al mismo tiempo, registrar notables progresos en materia de desarrollo democrático de base.

Bajo Chávez, que pudo erigirse en líder y también en financista del nuevo movimiento continental, gracias a la coyuntura favorable del petróleo en el mercado internacional, se fomentó sobre todo decisivamente la economía solidaria. Además estimuló a sus simpatizantes a crear medios masivos alternativos con estructura cooperativa para hacerle frente con mayor eficacia al fuego cruzado de la prensa burguesa. También incitó al personal de empresas privadas, cuyos dueños las habían declarado en quiebra, a seguir administrándolas por medio de la autogestión. Este proceso del cambio político y social fue asegurado tempranamente mediante la elaboración de una nueva Constitución Nacional (Rey 2008: 178-181). Por primera vez en la historia de la región, el presidente venezolano creó también una base concreta para el ejercicio de la solidaridad subcontinental con el establecimiento del ALBA (op.cit.: 185-188, 228-229; Ringer 2008: 179-185).

El nuevo gobierno de Venezuela no carece de fallas y debilidades. Las principales son, sin lugar a dudas, el peligro del alza de precios, la corrupción (que parece haber aumentado todavía más bajo el gobierno de Chávez que bajo sus antecesores socialdemócratas y demócrata-cristianos) y también la violencia alarmante en algunas ciudades.

Después de este breve recorrido por la historia más reciente de América Latina se puede comprobar que esta región ha realizado esfuerzos para superar el estado de subdesarrollo. Las diferentes formas de reformismo burgués, sin embargo, no han traído un mejoramiento duradero de las condiciones de vida de la mayoría de estos pueblos. Viejas estructuras de poder permanecieron intactas y de eso se aprovecharon, en primer lugar, las corporaciones extranjeras dominantes, mientras que para sus filiales locales al menos caían de vez en cuando algunas migajas.

El campo de la izquierda comunista revolucionaria quedó hasta ahora atrapado en sus grilletes dogmáticos. Por su parte, los reformistas radicales declararon un “Socialismo del Siglo XXI” como su objetivo. Pero a ellos también les hace falta una brújula confiable que en el futuro los guíe por el camino hacia una sociedad creativa y solidaria. Abiertas quedan todavía muchas cuestiones acerca de la estructura de la propiedad en la economía y una política impositiva efectiva y justa. Los protagonistas del cambio esquivan estas preguntas como si los mencionados problemas centrales fueran insolubles.